

INTEGRACIÓN REGIONAL

UNA MIRADA CRÍTICA

Grupo de Trabajo CLACSO

Integración y Unidad Latinoamericana



CLACSO

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
Conselho Latino-americano de Ciências Sociais

#8

Abril 2020



En este número:

Crisis y globalización: el agotamiento de las iniciativas de integración regional en América Latina.

Martin Sanzana Calvet

Integración regional y opinión pública: ¿cuál es la relación?

Juan Francisco Morales Giraldo

Covid-19: Perspectivas de América Latina en una coyuntura global crítica.

Julián Horassandjian

Covid-19, caos sistémico y brasil en la geopolítica de América Latina.

Carlos Serrano Ferreira

Carlos E. Martins

Tensión en la frontera entre Colombia y Venezuela: llamado a la sensatez.

Consuelo Ahumada

Convocatoria a participar en la próximas publicaciones del boletín "Integración regional. Una mirada crítica".

Otras publicaciones del Grupo de Trabajo Integración Regional y Unidad Latinoamericana

CRISIS Y GLOBALIZACIÓN: EL AGOTAMIENTO DE LAS INICIATIVAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL EN AMÉRICA LATINA

MARTIN SANZANA CALVET
(CHILE)

La pandemia del coronavirus ha puesto en evidencia el retroceso global de la acción de los bloques de integración regional en todo el mundo. Se fortalece por el contrario el nacionalismo conservador que ya venía ganando terreno con anterioridad, donde cada país trata de resolver de forma aislada lo que David Harvey recientemente caracterizó como una crisis global multisistémica. Sacudida recientemente por una oleada de crisis políticas y sociales, América Latina no escapa a dicha conducta, y pese a la evidente precarización de los sistemas sanitarios de cada país, ha habido retardo y negacionismo en enfrentar la pandemia, y se mantiene una coordinación sanitaria virtualmente nula entre las naciones de la región.

Este escenario devela la profunda crisis de los esfuerzos de integración iniciados en los años sesenta en un contexto de guerra fría y modernización desarrollista. La historia de aquellas iniciativas regionales relativamente “endógenas”, para diferenciarlas de las de tipo panamericano o supra-continental directamente promovidas por Estados Unidos (NAFTA, ALCA) o grandes potencias del Pacífico (APEC, CTPP), es el relato de una sucesión de intentos de coordinación estatal-nacio-

nal geográficamente fragmentados, superpuestos, y sostenido por afinidades político-ideológicas y estrategias de desarrollo. Dado el contexto regional de elevada pobreza y desigualdad de ingreso, dependencia de las potencias centrales y persistencia de diferendos territoriales, ante la amenaza de cambios económicos, políticos o sociales, las elites locales han tendido históricamente a reforzar el nacionalismo y polarizar las sociedades, lo que ha obstaculizado avanzar a niveles de integración política efectiva.

Poco sobrevive de la progresión de las iniciativas de integración regional latinoamericana, ya sean tratados y acuerdos o foros políticos de coordinación, del periodo desarrollista donde primaba una relativa orientación “endógena”. De las iniciativas recientes, aquellas de corte más ideológico, el ALBA se ha visto reducido a su mínima expresión, por la caída y crisis de casi todos los gobiernos bolivarianos, y con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en México y las crisis internas de algunos países la Alianza del Pacífico perdió velocidad. Por otra parte, la alguna vez amplia Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) prácticamente se disolvió en 2018 con la retirada de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú. En cuanto al Mercado Común del Sur (MERCOSUR), quizás la iniciativa más consistente y consolidada, sigue vigente en sus tratados, pero ha perdido dinamismo y proyección, primero por la crisis con Venezuela, y luego por la orientación ultranacionalista y pro-norteamericana del nuevo gobierno brasileño, que además no congenia con la actual orientación del

gobierno argentino, dejando a este acuerdo más bien a la deriva ante la incertidumbre global.

El campo de la integración política constituye uno de los déficits más notorios de las iniciativas de integración. De los esfuerzos institucionales cabe mencionar al Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), creado en 1964 e institucionalizado en 1987. Aunque aún está vigente, dicho Parlamento no ha demostrado ni potestad regulatoria supranacional ni capacidad de articulación política. También existe la Comunidad de Estados Latino Americanos y Caribeños (CELAC), un mecanismo intergubernamental constituida en 2010 y que agrupa a casi la totalidad de estados soberanos del continente y Caribe, que tiene sus orígenes en el anterior Grupo de Río. Dicho esfuerzo tuvo cierto margen de coordinación política durante el auge de los gobiernos progresistas sudamericanos, pero entró en crisis en 2018 y su continuidad es incierta dada la salida de Brasil en 2020. Esta crisis coincide con la crisis política en Venezuela: el 2017 se creó el Grupo de Lima, espacio de coordinación política para buscar una salida pacífica a dicha crisis política, y el 2019 los gobiernos de Chile y Colombia lanzaron una nueva iniciativa de coordinación, el Foro para el Progreso de América del Sur (PROSUR), cuya primera (y hasta ahora única) acción fue el intento de hacer caer al gobierno de Venezuela mediante la presión internacional desde un acto en Cúcuta, Colombia.

Además de la escasa efectividad política de estos intentos institucionalizados en constituirse en actores de poder continental y global,

la legitimidad de base de dichas iniciativas escasamente movilizó adhesiones masivas y transversales en las sociedades nacionales que adherían a estos pactos, notablemente escaseando instancias de participación política democrática directa de los pueblos en la elección y toma de decisiones. A esta debilidad se le agregan serias distorsiones internas forzadas por el centralismo de las elites y las desigualdades etno-territoriales de las sociedades latinoamericanas. El despliegue burocrático de las iniciativas de integración tendió a reproducir la concentración de poder en las capitales, abordando iniciativas de integración desde la sociedad civil e inhibiendo las de los territorios subnacionales y de las primeras naciones. El ejemplo quizás más bien sucedido de integración subnacional promovida desde estas iniciativas es el de Mercociudades, aunque sus posibilidades radiquen más bien en las capacidades propias de asociatividad las ciudades.

Por otra parte, de la mano de la globalización el flujo de capital, personas, bienes y servicios sí ha mostrado una gran progresión en toda la región, tanto por la adscripción a pactos comerciales (OMC o bilaterales) como por las políticas aperturistas de signo neoliberal. Aunque no se ha integrado, en un sentido estricto sigue siendo integrada, a la fuerza y de manera asimétrica, por los mercados mundiales y la estructura jurídica multinacional. Los países de la región han privilegiado un neo-extractivismo que hasta la crisis global de 2009 posibilitó un alza significativa del crecimiento del PIB por cuenta de las exportaciones de commodities. Así, por ejemplo, aunque las

políticas de la UNASUR se cancelaron, su Iniciativa para la Integración de Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) ha sido apropiada por los países como guía de proyectos pro-extractivistas para facilitar la exportación de recursos naturales y agropecuarios hacia los mercados del Pacífico. Esa renovada orientación “exógena” llevó a una carrera por la firma de Tratados de Libre Comercio (TLCs) bi o multilaterales con Estados Unidos, Europa, Asia y China, que más bien debilitaron las capacidades de negociación colectiva de la región, pactando condiciones escritas de cesión de soberanía a favor de corporaciones transnacionales y aceptando de facto un incremento del poder blando de las grandes potencias sobre la economía y política de los países del Sur.

Ante una escasa integración Sur-Sur y el fracaso de los bloques latinoamericanos alternativos a la hegemonía norteamericana, la región ya tenía pendiente enfrentar de mejor forma la emergencia climática global y la crisis social y migratoria, a lo que se agrega la tensión derivada del ascenso de China y las fricciones entre esas potencias, por ahora agrupadas bajo el rótulo de “guerra comercial”. América Latina sigue aún estrechamente unida a Estados Unidos pero crecientemente integrada a la economía China, que es el segundo socio comercial de la región y primer socio de algunos países como Brasil y Chile. En ese contexto la irrupción del coronavirus emerge como una fuerza des-estructurante que ya remece toda la arquitectura de la globalización, y cuyas consecuencias son imprevisibles.

Para economías tan dependientes de las exportaciones de commodities e importaciones de manufacturas y servicios -y de la fluctuación del cambio- y del valor de su deuda, esta situación representa el riesgo real no sólo de crisis internas sino de shock externos y remate de activos por parte de las fuerzas económicas y geopolíticas globales en mejores condiciones. Hay además dudas fundadas sobre la capacidad de los precarios sistemas sanitarios latinoamericanos de contener y tratar una avalancha de contagios y decesos, castigada la salud pública por recortes y privatizaciones y presionada por una elevada tasa de pobreza estructural y de precariedad urbana. Las severas desigualdades socioeconómicas y etno-territoriales de las sociedades latinoamericanas, unidas a la alta polarización, fragmentación y crisis de los gobiernos y sistemas políticos, acerca los escenarios de inestabilidad política.

En su conjunto, la constatación del agotamiento de estas iniciativas de integración regional demanda una revisión crítica de los fundamentos en los cuales se basaron, y una urgente búsqueda de nuevos paradigmas y propuestas de articulación en un contexto global cruzado por dinámicas que han debilitado la globalización capitalista pero también imponen aún más penosas condiciones de sobrevivencia de los pueblos del Sur.

INTEGRACIÓN REGIONAL Y OPINIÓN PÚBLICA: ¿CUÁL ES LA RELACIÓN?

JUAN FCO. MORALES GIRALDO
(PERU)

En los años 2000, la integración regional en Latinoamérica cobró impulso como parte de una renovada agenda exterior de gobiernos progresistas cuyas fortalezas provenían de la apertura de la participación política, la movilización desde arriba, y la inserción económica de sectores populares, configurando entonces una transición hacia regímenes más representativos. El recurso a viejas categorías discursivas que apelaban a la legitimidad del pueblo, dejaban margen para sopesar la influencia que podría tener la opinión pública, como expresión de una mayoría popular, en aspectos puntuales de la nueva agenda del progresismo latinoamericano. Sin embargo, incluso con una ciudadanía mayoritariamente favorable, la integración regional entró en deterioro hacia la segunda década. Paradójicamente, el apoyo mayoritario que parecía reflejarse en la opinión pública (véase Chelala, 2016; Beliz y Chelala, 2016), no fue suficiente para prevenir el colapso institucional.

Según informes elaborados entre 2016 y 2017 por el Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL) en alianza con la Corporación Latinobarómetro, la opinión pública en los países de la región se mostraba mayoritariamente a favor de la integración regional. En promedio, un 77% de los encuestados apoyaba la

integración económica (con porcentajes mayores a 80% en algunos casos), y un promedio de 60% apoyaba la integración política. Según los autores del informe, estos hallazgos reflejaban la clara “vocación integracionista” de muchos países de la región, a contracorriente en un contexto global donde las tendencias proteccionistas iban cobrando protagonismo (Beliz y Chelala, 2016). Sin embargo, pese al “enorme consenso” que parecía suscitar entre los latinoamericanos el apoyo a la integración regional, la desaparición de UNASUR y el prolongado estancamiento de otros acuerdos de mayor alcance funcional, plantearon dudas acerca de la verdadera importancia de la opinión pública como catalizadora de estos procesos. ¿Cómo explicar la brecha entre una opinión pública mayoritariamente a favor de la integración regional y el deterioro del propio integracionismo?

El primer aspecto a considerar es la transferencia de las preferencias y demandas ciudadanas a los procesos del sistema político y la influencia que pueden llegar a ejercer en las decisiones de política exterior. En un estudio publicado en 1970, el politólogo estadounidense Ronald Inglehart identificaba situaciones similares al caso latinoamericano actual: conforme se obtenían datos más detallados sobre percepciones de la ciudadanía con metodologías más elaboradas, emergían nuevas problemáticas que debían ser explicadas. Según Inglehart, las encuestas de opinión son importantes para el estudio de la integración regional sólo si proporcionan evidencias acerca del grado de influencia de la ciudadanía en las acciones de gobierno. Entonces, ¿tiene la opinión pública en los

países latinoamericanos algún grado de influencia en los procesos de decisión de políticas sobre integración regional? La relativa importancia de la opinión pública en este asunto, decía Inglehart, depende de tres condiciones:

(a).- de la estructura de las instituciones de toma de decisiones (¿qué tanto admiten los sistemas políticos de la región una participación plural en las decisiones de gobierno, o la presencia de grupos alternativos en una competencia institucionalizada?);

(b).- de la distribución de capacidades políticas entre grupos de la sociedad civil (las oportunidades de organización para la movilización política, la representación efectiva, y el acceso a la información, pueden ser factores determinantes en sociedades, como las latinoamericanas, con altos niveles de desigualdad);

(c).- del grado con que las políticas de gobierno responden a valores arraigados u orientaciones coyunturales (¿realmente creen los latinoamericanos que la integración regional contribuye a su propio desarrollo económico y social?) (1970: 765-768). En Latinoamérica, el estado de deterioro actual de la integración regional quizás requiera prestar más atención a los valores que sostienen esas políticas, y que pueden estar o no reflejados en la ciudadanía, que sólo a aspectos institucionales y participativos como factores explicativos de la brecha señalada al inicio.

En la encuesta Latinobarómetro de 2015,

un promedio de 33% de encuestados (con máximos de 46% en algunos casos) respondió “no saber” ante la pregunta sobre qué institución multilateral contribuía más al desarrollo de su país (por ejemplo, en Colombia y Perú más personas señalaron al Mercosur que a la Alianza del Pacífico). Tiempo después, al ser consultados sobre qué temas son más relevantes en ese mismo sentido, la integración regional fue considerada una prioridad para el desarrollo por 1 de cada 4 personas (Beliz y Chelala, 2016: 22-23; Basco, 2017: 31-32). Sin embargo, la demanda de integración económica según cada país fue relativamente baja (a menor porcentaje, mayor satisfacción), con un promedio regional de 7,3%. Visto de otro modo, en promedio, 62% de los latinoamericanos se mostró conforme con la integración lograda (Basco, 2017: 33).

En resumen, las encuestas no apuntaban a una vocación clara por una integración regional más profunda (al contrario de lo interpretado por los autores de los informes), pero sí a cierto nivel de satisfacción por los resultados de estas políticas. El deterioro institucional de los acuerdos, en cambio, no reflejaba este optimismo.

La aparente incongruencia entre los datos y los hechos nos lleva a pensar que la relación entre opinión pública e integración no se limita al plano de las políticas. La brecha entre una opinión pública mayoritariamente a favor y un proceso de integración en crisis, puede tener causas en un segundo aspecto importante: aquello que los ciudadanos de los países latinoamericanos entienden

por integrar. La aproximación a la integración regional en América Latina fue siempre predominantemente funcional y pragmática por enfatizarse aspectos económicos de carácter técnico. El paradigma del regionalismo abierto introdujo un fuerte sesgo económico y comercial en los esquemas de integración regionales que ha demostrado ser más resistente que el integracionismo post-liberal, de mayor contenido político, pero actualmente en crisis. El apoyo al libre comercio en las encuestas como parte de un proceso de integración regional (Beliz y Chelala, 2016: 24-25), y la preferencia de los gobiernos por impulsar una integración negativa, orientada a la eliminación de barreras para la liberalización comercial, en lugar de una integración positiva, centrada en el diseño de políticas comunes e instituciones, ilustran esa vocación pragmática. Sin embargo, la liberalización de los intercambios comerciales sólo crea economías más interconectadas, no necesariamente más integradas. En la práctica, más allá de la retórica, toda integración económica depende de una integración en sentido político (v. Ilievski, 2015). Pero sobre esto las encuestas muestran a una opinión pública poco dispuesta a asumir los costos de una institucionalidad compartida. En conclusión, no se trata únicamente de la influencia que puede ejercer la opinión pública en los procesos de toma de decisiones. Su importancia como catalizador de la integración regional, en un sentido real, depende también de los preconceptos que motivan las demandas y orientan las preferencias.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BASCO, A. I. (2017). La tecno-integración de América Latina. N° IDB-TN-1340. Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL), BID, Latinobarómetro.

BELIZ, G. Y S, CHELALA (2016). El ADN de la integración regional. N° IDB-TN-1120. Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL), BID, Latinobarómetro.

CHELALA, S. (2016). Dimensiones objetivas y subjetivas de la integración regional y global en América Latina. Nota técnica N° IDB-TN-966. Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL).

ILIEVSKI, N. LJ. (2015). "The Concept of Political Integration: The Perspectives of Neofunctionalist Theory", *Journal of Liberty and International Affairs* 1 (1), pp. 1-14.

INGLEHART, R. (1970). "Public Opinion and Regional Integration", *International Organization* 24 (4), pp. 764-795.

COVID-19: PERSPECTIVAS DE AMÉRICA LATINA EN UNA COYUNTURA GLOBAL CRÍTICA

JULIÁN HORASSANDJIAN
(ARGENTINA)

La ausencia de una respuesta de alcance global al desafío sanitario y económico planteado por el COVID-19 ha expuesto la inexistencia de un sistema de cooperación internacional o “gobernanza global” que se encuentre en estado operativo. Si bien el orden multilateral venía experimentando signos de debilidad y un retroceso sin precedentes desde su creación, en un escenario de crisis como el actual contrastan aún más las pocas herramientas que se han dejado al alcance frente al grado de interdependencia alcanzado entre las naciones. De esta manera, la propia lógica de deslocalización productiva promovida por las Cadenas Globales de Valor (CGVs) se ha vuelto un elemento dañino para las economías centrales. Esto resulta evidente tras el espasmo económico que tiene lugar cuando las fronteras se vuelven a elevar y se interrumpen las cadenas de suministro.

El consenso sobre los beneficios de la desregulación y la liberalización, que se ha materializado en un elevado grado de interconexión productiva, económica y financiera entre extensas áreas geográficas, parece caer por su propio peso cuando se percibe el retraimiento del Estado Social y la persistente desinversión en cuestiones de orden sanitario. En esta trama, el desembolso de fondos públicos vuelve a adquirir preeminencia y se apun-

ta como una de las escasas opciones disponibles para aminorar los efectos de largo plazo que va a dejar la pandemia en el terreno económico y social. Lo más destacable en este contexto es que la gestión del impacto del COVID-19 se ha canalizado a través de vías exclusivamente nacionales. Ante la falta de iniciativas reales de políticas articuladas a nivel interestatal, la OMS, como autoridad sanitaria, ha cumplido la función de difundir recetas comunes de políticas públicas para frenar el avance de la pandemia. Sin embargo, incluso en este ámbito aparecieron casos de desviación, como los gobiernos de Jair Bolsonaro, Boris Johnson o Donald Trump; independientemente de que luego, la expansión y letalidad del virus puertas adentro los obligó a torcer sus posturas iniciales.

En el caso del fenómeno del proteccionismo económico, que venía arrastrando episodios de tensión durante la “Guerra comercial”, se puede sostener que aceleró su nivel de contagio. Al mismo tiempo, se observó un clima de mayor hostilidad y de refuerzo del carácter nacionalista de algunas políticas exteriores. El freno puesto a la llegada y/o exportación de insumos sanitarios ilustran este recrudecimiento del relacionamiento entre Estados adoptando medidas unilaterales. Por lo tanto, la crisis multifacética del COVID-19 ha expuesto síntomas que ya tenían presencia en el escenario global y cuyo impacto tendió a agudizarlos. Entre estos, la transición de poder global de Occidente al Asia Pacífico también parece acelerarse, donde el vaciamiento de las instancias multilaterales por parte de Estados Unidos empieza a ser compensado por la diplomacia humanitaria

desplegada por China. Si bien, esta movilización de recursos a lo largo del globo es un medio para limpiar la imagen de Beijing, no deja de ser una demostración del lugar que busca ocupar en el tablero geopolítico. Mientras que la Unión Europea (UE) transita la costosa tarea de mantener la cohesión comunitaria en medio de las posturas enfrentadas entre los países más ricos y los más pobres. En este plano, los principios de solidaridad y cooperación del proyecto de integración europeo vuelven a ser puestos a prueba, luego de la crisis financiera y la ligada a la recepción masiva de refugiados, tras el fuerte embate del virus en Italia y España. Por su parte, la región de América Latina y el Caribe, con sus matices, ya se encontraba atravesando una situación delicada a nivel económico con anterioridad a la difusión de la pandemia, y sin contar con un esquema regional sólido que pudiera amortiguar el impacto del coronavirus.

EL DESAFÍO DE LA PANDEMIA A NIVEL REGIONAL

La condición de mayor vulnerabilidad derivada del escaso margen de maniobra fiscal con el que cuentan, en general, los Estados latinoamericanos, considerando el endeudamiento externo y un crecimiento económico estancado en los últimos años (CEPAL, 2020), hace que los efectos del COVID-19 tengan una mayor repercusión en el tejido social¹. Esto se debe a la situación estructural presente en gran parte de las economías

latinoamericanas que no tienen un sistema de protección social robusto y cuyos sectores productivos que demandan más empleo fueron los mismos que debieron reducir o suspender su actividad. Por otro lado, aun siendo interrumpido temporalmente el pago de deuda externa, la menor disposición de liquidez supone un punto de partida adverso a la hora de lanzar un plan anticíclico, al estilo de la UE².

A grandes rasgos, estas son las condiciones en que la región latinoamericana recibe la pandemia y donde va a quedar en evidencia la fragilidad de la cooperación interestatal durante estos meses en que el COVID-19 ha acaparado la agenda política mundial. En este plano, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha continuado su línea declarativa en lugar de proactiva, limitando su accionar a emitir comunicados con escasa profundidad y lejos de estar a la altura que la situación demanda. Por su parte, la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL) sostuvo una postura más próxima a promover la actuación coordinada. Entre las medidas llevadas a cabo desde este organismo, se destaca la creación de un Observatorio para monitorear y realizar un seguimiento de las políticas públicas ejecutadas en cada país para aminorar el impacto de la pandemia. Esta iniciativa funcionaría como un acervo sobre las medidas tomadas a nivel nacional y sectorial, para la consulta y cooperación de los gobiernos de la región.³

1 CEPAL (2020): Dimensionar los efectos del COVID-19 para pensar en la reactivación. Informe Especial COVID-19 N° 2, Santiago, CEPAL, pag. 21.

2 En internet disponible en <https://www.consilium.europa.eu/es/policies/covid-19-coronavirus-outbreak-and-the-eu-s-response/>

3 En internet disponible en <https://www.cepal.org/es/comunicados/la-unica-opcion-estrategica-mediano-plazo-mitigar-efectos-co->

En el caso del Mercosur, más allá de la postura disruptiva de Brasil, algunos sectores han conseguido destinar fondos comunes del bloque hacia la investigación en materia sanitaria. Este proyecto fue denominado “Investigación, Educación y Biotecnologías aplicadas a la Salud” y articula a los principales centros de estudios médicos de los Estados Parte, con la finalidad de desarrollar, en un primer momento, tecnologías más ágiles y certeras en el diagnóstico del virus. De esta forma, el Instituto de Biomedicina de Buenos Aires (IBIOBA-CONICET), la Fundación Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) de Rio de Janeiro, el Laboratorio Central de Salud Pública (LCSP) y CEDIC, ambos de Asunción, y el Institut Pasteur de Montevideo han recibido financiamiento para buscar una respuesta científica contra el COVID-19. Este impulso resulta interesante, porque encuentra un espacio de cooperación paraestatal, más allá de las discrepancias sobre política comercial y relacionamiento externo existentes hoy en día dentro del Mercosur⁴.

Sin embargo, el sesgo presidencialista sigue actuando con fuerza en el bloque del Sur, debido a que la “alta política” muestra reticencias para el desarrollo de una estrategia común frente al impacto de la pandemia. La actuación unilateral de Brasil, cuya gestión interna se encuentra al borde de provocar una crisis política, da cuenta de un nacionalismo reforzado y sin disposición a la cooperación. Este esquema resulta preocupante,

teniendo en cuenta las perspectivas económicas para la región y el mundo, y la dependencia en materia productiva en algunas industrias, como la automotriz.

La caída en los precios de las commodities y la reducción de la demanda externa suponen un panorama complejo para los modelos agroexportadores vigentes en América Latina. Por lo que, resultaría más coherente mirar a la región como un ámbito desde el cual promover políticas de carácter conjunto en materia de salud, investigación e incentivos para el comercio intrarregional. Esta parece mostrarse como una vía más consistente para la reactivación económica antes que esperar la apertura de mercados externos, en un mundo que está cerrando fronteras y donde las medidas proteccionistas están a la orden del día. Sobre todo, porque la redistribución de poder global hacia el Asia Pacífico y el avance de China como potencia industrial y tecnológica no encierra fórmulas mágicas para la región. Se vuelve necesario vertebrar el desarrollo en un esquema de cooperación efectivo a nivel regional, más aún en una coyuntura crítica como la que están atravesando los países del Mercosur y América Latina en conjunto.

CONCLUSIONES

Si hay algo que ha provocado la difusión de la pandemia es dejar al descubierto las características que ya estaban presentes, de forma

vid-19-la-region-es-avanzar

4 En internet disponible en <https://www.conicet.gov.ar/el-mercosur-aprobo-un-fondo-de-emergencia-de-us16-millones-que-serandestinados-al-combate-coordinado-contra-el-covid-19/>

más incipiente o más desarrollada, en el escenario mundial. Esto es: el declive del multilateralismo económico como instancia preferencial para la resolución de conflictos entre países y la adopción de medidas unilaterales no cooperativas; un mayor resquemor entre Estados que se traduce en políticas exteriores de corte más nacionalista; escenarios de fragmentación regional; y un progresivo reemplazo del liderazgo mundial. Por lo tanto, el COVID-19 es un punto de inflexión para repensar algunas estructuras dadas como sentadas desde una posición periférica. La condición de vulnerabilidad que persiste en los países de ALC es un móvil suficiente para buscar la reconstrucción de bienes públicos globales como lo ha sido el sistema multilateral. Mientras que, a nivel doméstico, la recuperación del rol de Estado es una variable ineludible para afrontar el desafío en varios frentes. Por último, siguiendo esta línea resulta evidente que la necesidad de montar una cooperación regional fluida y con profundidad no sólo es preferible en el mediano y largo plazo, sino como herramienta para transitar la coyuntura actual de forma menos costosa.

COVID-19, CAOS SISTÉMICO Y BRASIL EN LA GEOPOLÍTICA DE AMÉRICA LATINA

CARLOS SERRANO F.
CARLOS E. MARTINS
(BRASIL)

En 2020 la economía mundial entra en su mayor crisis de los últimos 100 años. La planetarización de la pandemia de COVID-19 representa el fin de la globalización neoliberal y la transición a un nuevo período de caos sistémico, que ya se había anunciado desde la elección de Donald Trump y el giro de Estados Unidos de un imperialismo informal a uno unilateral. La globalización neoliberal que se ha prolongado desde la década de 2010 con la débil recuperación de Estados Unidos y la Unión Europea, bajo el dinamismo del comercio internacional, de los flujos internacionales de capital y de la crisis del liberalismo político, sufre una contundente derrota ideológica con el reclamo que se vuelve dominante en la opinión pública de las políticas de intervención estatal para mantener los empleos y salarios de los trabajadores y la liquidez y los activos del sector productivo.

En Globalización, dependencia y neoliberalismo en América Latina, publicado por Boitempo (2011) y en versión en inglés actualizada y ampliada por Brill (2019), Carlos Eduardo Martins predice para 2015-2020 el fin de la globalización neoliberal y la apertura de un período caótico de desorganización sistémica, revoluciones y contrarrevoluciones. La crisis actual puede ser definida principalmente como una crisis civilizadora del

modo de producción capitalista y se caracteriza por la combinación de tres grandes movimientos: el fin de la fase expansiva de Kondratiev que comenzó en 1994, el establecimiento de nuevas etapas del declive del poder estadounidense y de contradicciones entre el capitalismo y la revolución científico-técnica.

La pandemia de COVID-19 está asociada con la profunda incapacidad de la globalización neoliberal y del modo de producción capitalista para asimilar el paradigma biotecnológico emergente y sus implicaciones sociales y ambientales. Los crecientes volúmenes de circulación de bienes y personas, el aumento de las escalas de producción geoespaciales y el incremento de la desigualdad mundial, impulsando el consumo superfluo y el mantenimiento de altos niveles de escasez y pobreza, presionan el equilibrio de los ecosistemas, tornan vulnerable la salud pública y se suman limitaciones del gasto social impuestas por las políticas neoliberales. La transición al paradigma biotecnológico requiere una fuerte inversión en ciencia, educación y salud pública, infraestructura social y nuevas fuentes de energía, diversificación de los patrones de consumo y un alto nivel de coordinación nacional e internacional de la planificación estatal.

La crisis tiene afectado principalmente a Estados Unidos y las más destacadas potencias de Europa (excluyendo Alemania), que en conjunto representan el 73,6% de las muertes de esta pandemia en el mundo, desde su inicio hasta el 5 de abril. El desplazamiento del epicentro de la cri-

sis mundial para Estados Unidos acentúa la vulnerabilidad productiva, financiera, tecnológica y social de su Estado frente a China, que no apenas controla con enorme eficacia una epidemia en su territorio, más se coloca al lado de Cuba y delante del mundo, como proveedora de ayuda y asistencia internacional. La superioridad de los sistemas socialistas para la gestión de paradigma tecnológico intensivo en bienes públicos se torna de notoria evidencia mundial. Eso tiende a acentuarse por las dificultades de las políticas keynesianas clásicas que funcionaron en periodos recesivos de larga duración como es lo que probablemente a lo que estamos ingresando.

El COVID-19 acelera la larga crisis de la hegemonía estadounidense y las reacciones imperiales para contenerla. El declive de la hegemonía estadounidense abrió el espacio para la proyección de poderes de dimensión continental en la economía mundial, como China y Rusia, y para una nueva ola de surgimiento de la izquierda en América Latina, alterando profundamente la geopolítica de esa región. Estados Unidos se ha visto amenazado en el territorio que considera su principal espacio vital, perdiendo su status en él de único gran poder con influencia. Luego abandonaron gradualmente el apoyo a los procesos de re-democratización iniciados desde la administración de Jimmy Carter - con la excepción de las intervenciones en Granada, Panamá y Haití y el apoyo a la guerrilla hondureña contra el gobierno sandinista - y patrocinaron los golpes de estado en Paraguay (2012), en Brasil (2016), Bolivia (2019) e intentos de poner fin a la República Bolivariana

en Venezuela. Este proceso alcanza su forma más aguda en la Administración de Trump, que expande significativamente el gasto militar – reducido durante el segundo mandato de Obama - y fortalece el Comando Sur, trasladando gran parte del conflicto a la región, apoyándose en fuerzas locales para guerras híbridas. Él instala bases militares en Brasil y Argentina, subordina a México a una política exterior agresiva, reanuda y profundiza la política de bloqueo de Cuba, extiende sanciones y amenazas al Gobierno de Maduro, organiza el Grupo de Lima con el quien busca preparar una intervención para derrocarlo y articula la extrema derecha internacional para llevar a cabo golpes de Estado y acciones subimperialistas serviles al liderazgo estadounidense. La crisis en la producción de gas de esquisto en los Estados Unidos, debido a la caída de los precios del petróleo impulsada por Rusia, aumenta la agresividad del imperialismo territorial de Estados Unidos hacia Venezuela y América del Sur.

Se crea una importante polarización geopolítica en la región: por un lado, el imperialismo estadounidense, el gran capital internacional y las burguesías internas latinoamericanas, cada vez más intermediarias, apoyadas en la sobreexplotación de los trabajadores y entrega de la riqueza nacional al capital extranjero, y por el otro, la izquierda, los movimientos sociales y el embrión de un proyecto multipolar del Sur Global, articulado por China y Rusia. Este escenario de bifurcación impulsa la alianza entre neoliberales y neofascistas, socialistas y demócratas radicales y las posibilidades de revoluciones, contrarrevolu-

ciones y guerras.

El gobierno del presidente Jair Bolsonaro se articula a este contexto, buscando ejercer un subimperialismo vasallo de los Estados Unidos. Representa el protagonismo político de una lumpenburguesía que con el apoyo mayoritario de la burguesía interna, temerosa de la organización de las clases trabajadoras impone la recesión estructural, altos niveles de desempleo, la aceleración de la desindustrialización y la transición a una nueva etapa de dependencia. El proyecto económico neocolonial, dirigido por el Ministro de Economía Paulo Guedes, es internacionalizar el sistema financiero brasileño, destruir los bancos públicos y dolarizar a Brasil, atándolo a la dominación estadounidense, de modo que arrastre a Sudamérica, aislándola de la influencia china y rusa o del resurgimiento de las políticas de integración soberana. Para eso se apoya en las políticas combinadas de reducción de las tasas de interés de la deuda pública, estrangulamiento de la financiación pública al sector productivo y recortes en el gasto público primario, que impulsan la fuga de capitales, la fuerte devaluación del real y la preferencia por la liquidez en dólares, así como en la aprobación futura del Proyecto de Ley de Liberalización Cambial (5387/19).

A pesar del alto nivel de reservas, el COVID-19 golpea una economía vulnerable dirigida por grupos que resisten a flexibilizar las políticas de recesión estructural. Los intentos fallidos del presidente Bolsonaro de minimizar los riesgos humanos de la pandemia, evitar restricciones en el movimiento de personas y colocar la actividad

económica por encima de la vida humana han erosionado su popularidad, que, sin embargo, sigue sostenida por el 30% de la población. Las políticas anticrisis que representan el 10% del PIB se han orientado a garantizar la rentabilidad y los activos de los sectores financiero y empresarial. Encuentran en PL 10/2020, que permite que el Banco Central intervenga sin límites en el mercado secundario de capital, financiero y de pagos, su principal expresión. Al mismo tiempo, el gobierno permite a los empresarios despedir o “negociar” la suspensión de los contratos de trabajo y recortar salario/jornada de trabajo hasta 70%, ofreciendo como compensación a los trabajadores proporcionalmente el monto del seguro de desempleo, cuyo valor máximo es de aproximadamente \$340. A los trabajadores informales se les ofrece \$112, alrededor de 57% del salario mínimo.

La crisis económica, social y política brasileña continuará avanzando con fuertes implicaciones geopolíticas regionales. Un proyecto tan subordinado al imperialismo estadounidense produce alto nivel de centralización y concentración de capitales, restricciones ideológicas al comercio exterior y choques en el proceso de reacomodación burguesa. Las izquierdas deberán aprovechar desde una perspectiva propia, socialista y democrática, las energías liberadas por estas fracturas, sin subordinarse a ellas.

TENSIÓN EN LA FRONTERA ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA: LLAMADO A LA SENSATEZ.

CONSUELO AHUMADA
(COLOMBIA)

Adoptar políticas efectivas y a tiempo para contrarrestar los estragos del COVID-19 en América Latina ha resultado ser un desafío monumental para todos sus países, teniendo en cuenta la debilidad del Estado, la precariedad de la salud pública y la seguridad social y los altos niveles de pobreza e informalidad que prevalecen. Es una radiografía precisa de los estragos de más de tres decenios de políticas neoliberales.

LA OFENSIVA MILITAR DE ESTADOS UNIDOS

Sin embargo, como si esto no fuera suficientemente grave, existen razones adicionales de perturbación y de zozobra para la paz regional. Invocando de nuevo la fracasada y cuestionada cruzada antinarcóticos de su país, hace una semana Donald Trump inició un gigantesco despliegue de destructores navales, barcos de combate y aviones militares en el Caribe, frente a la costa de Venezuela. Pero también se movilizó hacia el Pacífico y anunció que el objetivo inmediato de todo este operativo era frenar a los carteles mexicanos y al gobierno de Maduro que, según supuestos datos de inteligencia militar, estaban empeñados en aprovechar la pandemia para incrementar sus envíos de droga a Estados Unidos.

El renovado e inoportuno ímpetu militar del Presidente se extendió también al viejo continente, hoy tan afligido por la pandemia. Sin tener en cuenta las restricciones impuestas por sus países y las objeciones de algunos de sus mandatarios, la semana pasada, en el marco de la OTAN, Washington envió 30.000 tropas adicionales para participar en el proyecto Defender Europe 20, que se desarrollará entre abril y mayo próximos, junto a 7.000 militares de 17 países. Su objetivo: incrementar la capacidad de despliegue rápido de una gran fuerza de combate.

Pero volvamos a Suramérica y el Caribe. Al tiempo con el operativo naval, desde el territorio colombiano soldados estadounidenses adelantan ejercicios militares conjuntos con el Ejército de este país en la frontera con Venezuela. Los ejercicios cuentan con la anuencia del Presidente Iván Duque, quien hace dos días presentó el operativo del Caribe como la Campaña Naval Internacional de Lucha contra el Narcotráfico Orión 5. Esta incursión constituye una violación flagrante de la Constitución colombiana, que prohíbe de manera expresa el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional sin la aprobación previa del Congreso y del Consejo de Estado.

PANDEMIA, ELECCIONES PRESIDENCIALES Y CERCO A VENEZUELA

El escalamiento del ataque contra el país vecino no debe sorprender. De hecho, durante los últimos meses Washington intensificó su arreme-

tida contra los gobiernos alternativos sobrevivientes en la región. El golpe de Estado de Bolivia, consumado en noviembre pasado hizo parte de esta ofensiva.

Sin embargo, en el caso del operativo contra Venezuela, lo que sí llama la atención es el nivel de cinismo y la sangre fría del magnate a pesar de su mente calenturienta, quien pretende exacerbar el conflicto precisamente cuando su propio país se convirtió en el eje de la pandemia global y cuando, según cálculos conservadores de sus mismas autoridades, allí podría haber millones de infectados y cientos de miles de víctimas fatales.

Esta perspectiva tan sombría es precisamente la razón principal de la ofensiva militar que estamos contemplando, como en una película de terror. Después de un manejo cínico, xenófobo y vergonzoso de la crisis sanitaria que pretendió negar hasta hace pocos días y de los pronósticos sobre la crisis del desempleo y la economía que se avecina, Trump busca con desespero que en noviembre el operativo se revierta en apoyo electoral entre los sectores más conservadores del país. Con ese fin, además de culpar a China de la crisis, la ha emprendido más recientemente contra la OMS.

En todo el proceso de agredir a Venezuela la Casa Blanca ha contado con el respaldo decisivo del sector más retardatario del establecimiento republicano y demócrata; los gobiernos de extrema derecha del continente, en especial el de Colombia, reunidos para ello en el Grupo de Lima, bajo

la coordinación de Washington; las desacreditadas figuras de la oposición venezolana, en particular el señor Juan Guaidó y, un personaje oscuro y maléfico, Luis Almagro, a quien de manera truculenta acaban de reelegir como Secretario General de la OEA.

DE NUEVO, EL PRETEXTO DEL NARCOTRÁFICO

Después de diversos intentos fallidos de sacar a Nicolás Maduro del poder, Estados Unidos recurrió al viejo expediente de su país. Hace dos semanas, al mejor estilo del viejo oeste, el Fiscal General William Barr acusó al presidente de narcoterrorismo y ofreció recompensa por su cabeza y la de algunos de sus principales funcionarios. También lo hizo con las dos principales figuras de la disidencia de las antiguas FARC, Jesús Santrich e Iván Márquez.

Sin presentar prueba alguna, sindicó a todos ellos de inundar a Estados Unidos de cocaína durante los últimos veinte años. Días después de esa acusación, el emisario del emperador, Mike Pompeo, anunció una propuesta de transición para Venezuela diseñada por ellos, como condición para levantar las criminales sanciones económicas y comerciales que ejerce sobre el país. Como es lógico, fue rechazada por su gobierno y por los sectores democráticos de América Latina y el mundo.

Tanto la acusación como el momento en que se presenta son especialmente graves por varias razones. La primera, en medio de múltiples

dificultades económicas y financieras, Venezuela está afrontando el impacto de la pandemia, con un liderazgo que ya quisieran tener los otros países de la región. La segunda, porque, además de sindicarlo al gobierno de Maduro, involucra también a las antiguas FARC. Con ello, Estados Unidos busca un doble objetivo: legitimar una intervención militar en Venezuela y desvirtuar el acuerdo de paz en Colombia, proporcionándole un nuevo golpe. Se trata de reducirlo a su mínima expresión, tal como ha sido el interés de Iván Duque, de su mentor Álvaro Uribe y, por supuesto, de Donald Trump.

Sin embargo, para los incautos que todavía creen que Donald Trump es el sheriff que lidera la lucha contra la supuesta dictadura de Nicolás Maduro, hay cosas que no cuadran. De acuerdo con el italiano Pino Arlacchi, ex vicesecretario de la ONU y ex director de la Agencia antidrogas de la ONU (UNODC), se trata de una acusación sin ningún fundamento. Señala que en el último informe presentado a finales del año pasado por la DEA se estableció que el 90% de la cocaína que ingresa a Estados Unidos proviene de Colombia, el 6% de Perú y el 4% de otros países. En este negocio, que involucra al país del Norte como primer consumidor y a nuestro país como primer productor, no aparece Venezuela, como tampoco lo hace en el informe correspondiente de la UNODC (<http://revistadefrente.cl/pino-arlacchi-la-acusacion-contra-el-gobierno-de-venezuela-por-narcotrafico-es-una-basura-politica/>).

El cerco sobre el gobierno venezolano se fue cerrando a partir de la Cumbre antiterrorista

de Bogotá del 20 de enero pasado y con la más reciente visita de Duque a Washington, a comienzos de marzo. La sindicación a la dirigencia bolivariana estuvo precedida de un oscuro episodio mediante el cual dos ex generales venezolanos, Cliver Alcalá y Hugo Carvajal acusaron a su gobierno de vínculos con el narcotráfico.

El primero de ellos, quien ahora será testigo estrella en el proceso contra el gobierno venezolano, confesó que, por iniciativa de Juan Guaidó y de un grupo de asesores estadounidenses, transportó desde Barranquilla un cargamento de armas, incautado por el gobierno colombiano, con el que se intentaba promover una acción militar contra Maduro y “bañar de sangre” a Venezuela. Pero sobre eso como sobre otros asuntos comprometedores, nada dijo el presidente colombiano.

Todos estos juegos de guerra se dan frente a una frontera caliente, la segunda más larga del continente. Es bueno recordar que la tensión en esta zona, marcada por todo tipo de contrabando, se vive desde mucho antes de la llegada del chavismo. En ella actúan ahora diversos grupos armados, entre ellos el ELN, las disidencias de las FARC, los paramilitares y en particular el grupo de los Rastrojos, quienes hace un año le ayudaron al autoproclamado presidente a traspasar la frontera para asistir al show para la supuesta ayuda humanitaria, organizado en Cúcuta por los presidentes de Colombia, Chile y Paraguay y Almagro, bajo las órdenes de la Casablanca.

Como los demás territorios fronterizos del

país, la frontera colombo-venezolana ha sido muy golpeada por el conflicto armado y por el abandono histórico por parte del Estado, cuya presencia se ha centrado en la lucha antinarcóticos. Por ello, los indicadores de desarrollo humano de sus municipios están bien por debajo de la media nacional. En una frontera tan irregular, con pocos pasos legales y múltiples trochas sin control, cualquier incidente o provocación podría incendiar la pradera y convertirse en pretexto para desatar la incursión en el territorio del país vecino.

¿Y EL GOBIERNO COLOMBIANO?

Si de denunciar a los gobiernos aliados con la mafia se tratara, Trump podría mirar hacia el lado colombiano y examinar la trayectoria del uribismo y su vinculación de larga data con los negocios del narcotráfico y el paramilitarismo. Días antes de que estallara la pandemia, el gobierno de Duque/Uribe se encontraba en verdaderos aprietos. Poco a poco se fueron conociendo las evidencias de que un oscuro personaje de la mafia, el Ñeñe Hernández, había movilizado enormes recursos para comprar las elecciones presidenciales de 2018 para el actual mandatario.

A ello se sumaron las declaraciones en el mismo sentido de la ex parlamentaria colombiana Aída Merlano, quien huyó del país y se encuentra detenida en Venezuela. Más recientemente se conocieron las afirmaciones en el mismo sentido del político y paramilitar condenado Lucas Gnecco, y la acusación de un reconocido medio internacional a la vicepresidenta de la República por hacer nego-

cios con el narcotraficante Memo Fantasma.

Mencionemos también otro episodio gangsteril que quedó en suspenso. Hace dos meses se encontró un laboratorio para producir cocaína en la finca en Guasca, en las cercanías de Bogotá, del embajador de Colombia en Uruguay, un personaje de la entraña de Álvaro Uribe Vélez y de Aerocivil, la autoridad estatal que controla el tráfico aéreo, tan comprometida en otorgar licencias a narcotraficantes. Después de quemar parte de la finca para destruir evidencias, el gobierno no dio la menor explicación al respecto y el embajador siguió ocupando su cargo, hasta hace unos días cuando renunció, agradeciéndole al gobierno su confianza y comprensión.

O también podíamos evocar cómo en un país donde asesinan a diario a líderes y lideresas sociales y a excombatientes de las FARC, ante la indiferencia del Gobierno Nacional, hace dos meses el general Eduardo Zapateiro, máximo comandante del Ejército, expresó su pesar por la muerte de "Popeye", quien fuera el más sanguinario lugarteniente del tristemente célebre Pablo Escobar. Este general ha sido sindicado por su participación en los llamados "falsos positivos" (ejecución de civiles para hacerlos pasar por guerrilleros y obtener beneficios).

Pero también, a propósito de la lucha contra el narcotráfico, la Casa Blanca podría revisar la historia de la DEA y la CIA y de su participación en grandes negocios con las mafias, los militares y la extrema derecha en países como Bolivia, México y Colombia. Sin alejarnos del círculo estrecho

del poder de Trump, podría examinar la trayectoria de Elliott Abrams en la operación de apoyo a los contras de Nicaragua, con los recursos del narcotráfico, por allá en los años 80. Hoy es el encargado de "restaurar la democracia" en Venezuela.

NO A LA GUERRA, SÍ A LA COOPERACIÓN

El cerco unilateral impuesto por Washington a Venezuela y las sanciones económicas, financieras y comerciales se han intensificado durante los dos últimos años. Aparte de robarle 5 mil millones de dólares depositados en bancos de 15 países, al gobierno de Caracas no se le permite comprar alimentos ni medicamentos, entre otros productos. Un castigo similar afecta a Cuba e Irán, uno de los países más golpeados por la pandemia.

Frente a tan grave situación, en Colombia se impone afianzar una amplísima coalición que incluya las organizaciones políticas y sociales de la región fronteriza y del país, los gobernadores y alcaldes de los municipios fronterizos, el Comité del Paro que estalló el 25N, entre otros. Está en juego la vida, la salud y la paz en la región fronteriza y en los dos países.

El gobierno colombiano rechazó la propuesta de Nicolás Maduro de reestablecer relaciones diplomáticas para atender la emergencia de salud. Ante tamaña insensatez, se requiere de inmediato establecer algún tipo de coordinación con las autoridades venezolanas frente a la crisis sanitaria y el regreso masivo de venezolanos a su país, que

ahora huyen de la crisis en Colombia y Ecuador.

Por último, frenar la agresión a Venezuela es una causa que corresponde defender a todos los gobiernos y pueblos demócratas de Nuestra América y del mundo entero.

**PARTICIPA EN LAS PROXIMAS
PUBLICACIONES DEL BOLETIN
"INTEGRACION REGIONAL.
UNA MIRADA CRITICA"**

El boletín Integración Regional. Una Mirada Crítica, en forma periódica convoca a sus investigadores miembros a publicar artículos breves, así como también a investigadores externos. Su periodicidad es cuatrimestral, apareciendo los meses de abril, agosto y diciembre de cada año. Cuenta con una amplia difusión a través del portal web institucional de CLACSO y por redes sociales. También divulgamos los artículos en otros portales web de la región.

Si quieres publicar con nosotros, escribenos al correo boletinintegracionregional@gmail.com. Te esperamos.

**OTRAS PUBLICACIONES DEL
GRUPO DE TRABAJO
INTEGRACION REGIONAL Y
UNIDAD LATINOAMERICANA**

1.- BOLETINES.

NUMEROS 1 AL 8.

Disponibles en internet <https://www.clacso.org/grupos-de-trabajo/boletines/>

2.- LIBROS.

2018. AMÉRICA LATINA. UNA INTEGRACIÓN REGIONAL FRAGMENTADA Y SIN RUMBO. Silva, C.; Kan, J. Y A. Noyola (Coordinadores). Coedición CLACSO – MEGA II – IADE. Santiago, Chile.

En internet disponible en http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20190207040512/America_Latina_Integracion_Regional_Fragmentada.pdf

2014. DEMOCRATIC RENEWAL VERSUS NEOLIBERALISM. TOWARDS EMPOWERMENT AND INCLUSION.

Consuelo Silva and Claudio Lara, Editors. CLACSO – IDEAS – CODESRIA. Buenos Aires. December.

En internet disponible en http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/sur-sur/20141219093404/Democratic_renewal.pdf

2013. NUEVOS ESCENARIOS PARA LA INTEGRACIÓN EN AMÉRICA LATINA. C. Martins y C. Silva (Coordinadores).

Coedición CLACSO – U. ARCIS. Octubre, Santiago

En internet disponible en <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20131016025228/NuevosEscenarios.pdf>

2013. LOS RETOS DE LA INTEGRACIÓN Y AMÉRICA DEL SUR / Carlos Eduardo Martins (Coordinador). 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO.

En internet disponible en <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20130920035225/GT-RetosIntegracion.pdf>

Este boletín es preparado periódicamente por el Grupo de Trabajo "Integración Regional y Unidad Latinoamericana" del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – CLACSO.

El Grupo de Trabajo "Integración Regional y Unidad Latinoamericana" está conformado por investigadores de diferentes universidades y centros de estudios de América Latina y el Caribe. Sus integrantes son los siguientes:

Alberto Rocha Valencia

Alexis Nicolás Saludjian

Alfonso Guillermo Pérez Molina

Allen Sabinus Henry

Amanda Barrenengoa

Ariel Noyola Rodríguez

Ariela Ruiz-Caro Reyes

Carlos Da Rosa Martins

Carlos Serrano

Clara Rivero

Claudio Eduardo Lara Cortés

Consuelo Paz Silva Flores

Daniel Pereira Sampaio

Dario Salinas Figueredo

Ernesto Alfredo Vivares

Fabio Luis Barbosa dos Santos

Francisco Javier Leyva Ortíz

Gerald Solano Aguilar

Gisele Lorena González Célis

Gregorio Vidal

Gustavo Rojas de Cerqueira César

Hugo Vega Formoso

Isaac Rudnik

Jaime Antonio Preciado Coronado

Jaime Estay Reyno

Jorge Marchini

Jose Félix Rivas Alvarado

Juan Francisco Morales Giraldo

Julián Alejandro Horassandjian

Julián Kan

Julieta Ramírez Torres

Leonardo Federico Manchón Cohan

María Teresa Zegada

Mariana Aparicio Ramírez

Maribel Aponte García

Martín Sanzana Calvet

Mayra Vélez Serrano

Paz Millet

Ramiro Luis Bertoni

Ramón Torres Galarza

Roberto Rodolfo Georg Uebel

Rosa María Marques

Rosalba Linares de Gómez

Rosmery Hernandez Pereira

Roy Mora Vega

Sergio Carpenter

Wagner Iglecias

Actualmente, este Grupo de Trabajo es coordinado por Consuelo Silva Flores.

COMITÉ EDITORIAL:

CONSUELO SILVA FLORES

JULIAN KAN

Diseño: Manuel Olate Céspedes

Contacto:

Escribenos a:

boletinintegracionregional@gmail.com

Síguenos en:

Twitter: @GTIntegracionRI

Instagram: gtingracionregional